S u p r e m a C o r t e:

–I–

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia de primera instancia que había declarado la falta de aptitud jurisdiccional para conocer en la presente acción y, en consecuencia, declaró habilitada la instancia ante la justicia nacional del trabajo (fs. 38 del expediente digital, al que me referiré salvo aclaración en contrario).

Para así resolver, sostuvo que en el diseño recursivo de la Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, la función jurisdiccional resulta una mera revisión restringida de lo actuado en sede administrativa que no garantiza un control judicial amplio y pleno.

Señaló que el procedimiento ante las comisiones médicas jurisdiccionales (CMJ) se desarrolla ante un órgano administrativo encabezado por médicos, quienes no resultan idóneos en virtud de la índole jurídica de las cuestiones debatidas. Consideró que esa falta de idoneidad no se ve saneada por la intervención de secretarios letrados, pues éstos no emiten dictámenes vinculantes, y la resolución administrativa definitiva se mantiene a cargo de profesionales de la medicina. Afirmó que las CMJ tampoco satisfacen las exigencias de independencia e imparcialidad, en tanto los profesionales que las integran no gozan de estabilidad propia.

A su vez, en el precedente CNT 19381/2020, “García, Iván Alejandro c/ Provincia ART S.A. s/ accidente -ley especial”, decisión del 22 de septiembre de 2021, al cual remitió, la alzada había considerado que la reglamentación de la ley 27.348 efectuada por la resolución 298/17 de la SRT resulta lesiva del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, ya que -al establecer un plazo de 15 días para interponer recursos de apelación ante las comisiones médicas cfr. artículo 16-, introduce un supuesto de caducidad sin base

legal y contraviene al plazo más amplio de 2 años contemplado en el artículo 258 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, normativa de jerarquía superior.

Asimismo, entendió que la escasa cantidad de CMJ en funcionamiento obstruye el acceso en tiempo y forma a las prestaciones de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y evidencia la falencia grave del sistema para garantizar la igualdad de los afectados.

Consideró también que el artículo 1 de la ley 27.348 es regresivo, obstruye el derecho de acceso irrestricto a la justicia y lesiona las garantías de juez natural, igualdad, tutela judicial efectiva, defensa en juicio y debido proceso.

Sobre esa base, decidió apartarse del criterio sentado por la Corte Suprema en “Pogonza” (Fallos 344:2307), declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 27.348, concluyó que la actuación en sede administrativa no tiene efecto de cosa juzgada y declaró habilitada la instancia judicial.

–II–

Contra esa resolución, la demandada interpuso recurso extraordinario federal (fs. 39/52), que fue concedido (fs. 55).

Sostiene en primer término la existencia de una cuestión federal que la Corte Suprema debe tratar pues la sentencia en crisis es equiparable a definitiva, en tanto agota el curso ordinario del proceso sin que pueda obtenerse remedio por otra vía.

Considera que la decisión impugnada no constituye una derivación razonada del derecho vigente que vulnera sus derechos a la igualdad, al ejercicio de toda industria lícita, a la libertad, a la propiedad, al debido proceso y a la defensa en juicio (arts. 14, 16, 17 y 18, C.N.).

Argumenta que, al decretar la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la ley 27.348, y 14, 16 y 17 de la resolución 298/17 de la SRT, habilitar la instancia y dar curso a una demanda ordinaria que no cumple con la

vía recursiva prevista en la normativa vigente, la alzada incurrió en un supuesto de arbitrariedad que descalifica al pronunciamiento como un acto jurisdiccional válido. En el mismo sentido, recuerda que la declaración de inconstitucionalidad de una norma representa la *última ratio* de orden jurídico, según ha reiterado la Corte Suprema.

Señala que la actora transitó en forma voluntaria el procedimiento ante la CMJ 10 y luego inició la presente acción durante la vigencia de la ley 27.348, sin que se hubiese visto afectada su capacidad de presentar un reclamo y actuar en defensa de sus derechos.

Remarca que el artículo 2 de la ley 27.348 otorga carácter de cosa juzgada -en los términos del artículo 15 de la ley 20.744- a las decisiones administrativas de la CMJ o de la CMC que no fueran apeladas en el plazo legal que establece el artículo 16 de la resolución SRT 298/17. Señala que el actor contaba con 15 días hábiles para recurrir la decisión de la CMC y arguye que, vencido ese plazo, lo allí decidido adquirió efectos de cosa juzgada administrativa. A su vez, plantea la validez y adecuación de dicho plazo, pues aquellos que se afrontan durante el trámite del proceso judicial laboral son igual de acotados.

Destaca que el procedimiento previsto en la ley 27.348 garantiza un adecuado control y revisión judicial posterior de las resoluciones administrativas dictadas por las CMJ, estableciendo el artículo 2 una amplia vía recursiva que permite acudir al juez natural competente. Considera así, que la vía administrativa no importa una injerencia indebida en la instancia jurisdiccional.

Por último, sostiene que la sentencia en crisis se apartó de la doctrina sentada en “Pogonza” (Fallos: 344:2307), donde la Corte Suprema avaló el procedimiento cuestionado por la alzada y la vía recursiva prevista en el artículo 2 de la ley 27.348.

Si bien la decisión impugnada no es la sentencia definitiva de la causa, resulta equiparable a ella, por sus efectos, pues el planteo relativo al cumplimiento efectivo del procedimiento administrativo previo contemplado por la ley 27.348 no podría hacerse efectivo en una oportunidad procesal posterior (conf. dictámenes de la Procuración General en las causas CNT 44643/2017/1/RH1 Recurso de Queja N°1, “Alcaraz, Damián Ezequiel c/ Omint ART SA s/ accidente-ley especial”, emitido el 17 de mayo de 2019 y fallado en sentido concordante por la Corte Suprema en su sentencia del día 2 de septiembre de 2021, y CNT 51725/2017/1/RH1, Recurso de Queja N°1, “González Guazzini, Manuel c/ Swiss Medical ART SA s/ accidente-ley especial”, del día 17 de septiembre de 2019; Fallos: 327:367, “Gador SA”, entre otros).

Sentado ello, conforme surge de las constancias digitales del caso – ver escrito de demanda de fs. 3/15, documental de fs. 23/49, contestación de demanda de fs. 50/70 y escrito “contesta traslado” de fs. 24/28-, la actora habría sufrido un accidente *in itinere* el 14 de mayo de 2018 e inició el trámite administrativo ante la CMJ 10 de esta ciudad en procura del cobro de la reparación sistémica el 31 de octubre de 2018. Esa comisión dictaminó el 9 de enero de 2019 en el expediente SRT n° 305918/18 que el infortunio no dejó secuelas incapacitantes en la damnificada, y ello fue aprobado por el Servicio de Homologación el 16 de enero de 2019. Esa última decisión administrativa no fue apelada por la actora quien, el día 29 de julio de 2020, inició las presentes actuaciones ante el Juzgado Nacional del Trabajo n° 20 con sustento en el mismo accidente (conforme pase de la mesa general de entradas que surge del expediente digital).

En ese marco fáctico, en consonancia con lo dictaminado en CNT 44421/2019/CS1, “Peralta, Fernando Adrián c/ Prevención ART SA s/ accidente-ley especial” del 18 de octubre de 2022, considero que las cuestiones relativas a la validez de la ley 27.348 planteadas en el remedio federal encuentran

adecuada respuesta en el dictamen de esta Procuración General y la sentencia concordante de la Corte Suprema emitida en Fallos: 344:2307, “Pogonza”, a cuyos fundamentos y conclusiones me remito, en cuanto fuera aplicable al *sub lite*, en beneficio de la brevedad. Adicionalmente, el planteo que sostiene la validez constitucional del artículo 16 de la resolución 298/17 de la SRT fue tratado por esta Procuración General en el caso CNT 68714/2017, “Robledo, Margarita del Carmen c/ Asociart ART SA s/ accidente-ley especial”, dictamen del 20 de diciembre de 2021.

—IV—

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y devolver los autos al tribunal de origen a sus efectos.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2022.

ABRAMOVICH
COSARIN
Victor Ernesto

Firmado digitalmente
por ABRAMOVICH
COSARIN Victor
Ernesto
Fecha: 2022.11.28
15:46:32 -03'00'